

Estado de derecho, control de la corrupción y gasto público en educación, salud y servicios públicos en América Latina

ANTONIO RUÍZ-PORRAS*

NANCY GARCÍA-VÁZQUEZ**

Recibido: 11 de octubre de 2022. Aceptado: 9 de febrero de 2023.

Resumen. El propósito de este artículo es mostrar algunos hechos estilizados en las relaciones entre Estado de derecho y control de la corrupción y el gasto público en América Latina. Para efectos de comparación, los dos primeros indicadores se denominan institucionales; los indicadores de gasto público capturan los porcentajes de PIB que se destinan a educación, salud y servicios públicos. El análisis comparado se realiza para un panel de dieciséis países latinoamericanos, entre los años 2000 y 2020. Utilizamos estadísticas descriptivas, correlaciones *pairwise*, regresiones de mínimos cuadrados ordinarios y estimadores de bondad de ajuste. Nuestros hallazgos principales sugieren que: 1) los indicadores latinoamericanos tuvieron valores muy bajos y heterogéneos; 2) la heterogeneidad fue mayor en los indicadores de gasto que en los institucionales; 3) en los análisis estadísticos se observó que las relaciones entre variables no fueron directas ni unívocas.

Palabras clave: Estado de derecho, corrupción, América Latina, gasto público.

Abstract. We show some stylized facts and relationships between the Rule of Law and control of corruption and public spending in Latin America. Institutional indicators captures rule of law and

.....
* Antonio Ruíz-Porras es profesor-investigador del departamento de Métodos Cuantitativos, Universidad de Guadalajara-CUCEA, Jalisco, México (correo electrónico: antoniop@cucea.udg.mx | <https://orcid.org/0000-0003-4184-0850>).

** Nancy García-Vázquez es profesora-investigadora del departamento de Políticas Públicas, Universidad de Guadalajara-CUCEA, Jalisco, México (correo electrónico: nancy.gvazquez@academicos.udg.mx | <https://orcid.org/0000-0003-4001-0193>).

control of corruption; public spending indicators capture the percentages of GDP that are allocated to Education, Health and Public Services. The comparative analysis contains a panel of 16 Latin American countries, between 2000 and 2020. We use descriptive statistics, pairwise correlations, least squares regressions, and goodness-of-fit estimators. Our main conclusions suggest that: 1) the Latin American indicators had very low and heterogeneous values; 2) heterogeneity was bigger in spending indicators than in institutions; 3) in the statistical analyzes, the relationships between variables were not direct or unambiguous.

Keywords: Rule of law, corruption, Latin America, public expenditure.

1. *Introducción*

Las relaciones entre Estado de derecho y control de la corrupción y el gasto público son objeto de discusión entre quienes analizan el desempeño de las instituciones normativas y económicas. Si bien, en la teoría suele suponerse que existe un círculo virtuoso entre estas variables, la literatura empírica cuestiona que ello suceda así en distintos lugares y tiempos. En ese sentido, hay que decir que se carece de un consenso fundamental respecto a las relaciones entre estas variables y su potencial causalidad. De hecho, los estudios empíricos todavía están en una fase de desarrollo incipiente.

Por estas razones y con el propósito de aportar evidencia desde la experiencia de América Latina, en este artículo se estudian estas tres variables institucionales y económicas. La investigación utiliza indicadores institucionales y de gasto público, estadísticas descriptivas, correlaciones *pairwise*, regresiones de mínimos cuadrados y estimadores de bondad de ajuste. Los indicadores de gasto público refirieren al gasto en educación, en salud y en servicios públicos generales. El análisis utiliza un panel de indicadores anuales de dieciséis países latinoamericanos para el periodo 2000-2020.

Las fuentes de información del análisis comparado que aquí se presenta emplean las bases de datos Worldwide Governance Indicators y «Cepalstat». A través de éstas se genera panel de datos que incluye indicadores anuales para dieciséis países latinoamericanos durante el periodo 2000-2020. La base contiene datos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.¹

.....

¹ De la base de datos de WGI, recuperamos los índices complejos de Estado de derecho y el control

El estudio se sustenta en algunos supuestos conceptuales y metodológicos que definen, en buena medida, los alcances y límites de la investigación. Estos supuestos siguen las propuestas de Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, (2007) y (2011). Por esta razón, aquí se define el Estado de derecho como el grado en que los agentes confían y obedecen las reglas de la sociedad. El control de la corrupción, por su parte, se define como el grado en que se evita que el poder público pueda ejercerse en beneficio privado.

En el caso de América Latina, Kauffmann (2015) advierte que en la región la corrupción también puede manifestarse como la captura legal y regulatoria de la aplicación del Estado de derecho; ello porque la ley, se administra con base en criterios privados y no de legalidad. De esta manera, Kauffmann sugiere una definición de la corrupción como «la privatización de las políticas públicas».

En consistencia con las observaciones de estos autores, en este trabajo se asume que en América Latina las relaciones entre variables de Estado de derecho o control de la corrupción no necesariamente tienen relaciones de causalidad directas o unívocas.

Las principales contribuciones del trabajo son las siguientes: 1) estudiamos los hechos estilizados y relaciones de mediano plazo entre el Estado de derecho, el control de la corrupción y variables de gasto público para Latinoamérica; 2) se utilizan indicadores institucionales e indicadores de gasto comparables en el tiempo y entre los países; 3) las variables de gasto se refieren a educación, salud y servicios públicos con lo cual no sólo se analiza el tamaño de los egresos sino su destino; 4) se evalúa la potencial existencia de relaciones no directas ni unívocas entre las variables.

El documento se divide en seis secciones. La segunda sección incluye la revisión de la literatura. La tercera describe los datos y la metodología. La cuarta sección incluye el análisis descriptivo de los indicadores. En la quinta se muestran las relaciones empíricas estimadas. La sexta sección discute los resultados.

.....

de la corrupción, que miden percepciones sobre estas variables. Por simplicidad las agrupamos en una categoría denominada Indicadores Institucionales. La base de datos de Cepalstat contiene las tres variables con las que se mide el gasto público: Educación, Salud y Servicios Públicos. De la misma manera, por simplicidad se agrupan como indicadores de gasto público. Estas variables están expresadas como porcentajes del producto interno bruto. La base de datos contiene 336 observaciones anuales por país y por variable.

Nuestro trabajo es probablemente el análisis que, usando los datos del WGI contiene el mayor número de países en el periodo más largo de tiempo para una región.

2. *Revisión de la literatura*

En esta sección se presenta el estado del arte de las discusiones teóricas y los estudios empíricos que abordan las distintas relaciones entre Estado de derecho, control de la corrupción y el gasto público. Antes de presentar la revisión, habría que señalar al menos tres características generales de la literatura aquí seleccionada. La primera de ellas es que la literatura está fuertemente vinculada al neoinstitucionalismo económico y político. La segunda, es que no hay un consenso acerca de la causalidad. La tercera característica es la heterogeneidad en las distintas muestras de países que se estudian y, esto, por supuesto condiciona los hallazgos y alcances de las investigaciones.

Esta sección la separamos en dos apartados. El primer apartado aborda los principales enfoques teóricos. En el segundo apartado, destacamos los trabajos empíricos valorando: la muestra de países (por años, número), las técnicas de análisis y sus hallazgos.

2.1. Estado de derecho, control de la corrupción y gasto público: una revisión teórica

La literatura que estudia la relación del Estado de derecho con la corrupción se vincula estrechamente con las teorías institucionalistas tradicionales. North define las instituciones como «las limitaciones ideadas por el hombre, que estructuran las interacciones políticas, económicas y sociales» (1981, 36). Estas limitaciones se presentan como reglas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad, etcétera) o bien como reglas informales (sanciones, costumbres, códigos de conducta, entre otros).

A partir de esta definición, la escuela del nuevo institucionalismo ha desarrollado una extensa línea de investigación acerca de cómo las instituciones formales e informales explican el desempeño económico de los países. Así, por ejemplo, existe una vasta literatura que explica cómo la prevalencia de instituciones formales es una condición para el desarrollo económico (Acemoglu, Johnson, 2005; Acemoglu, Johnson, y Robinson, 2012).

En el mercado, las instituciones deben garantizar los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos y la acumulación de capital. En lo político, se debe mantener el estado de derecho, un marco constitucional para la transferencia del poder, el recono-

cimiento legal de los derechos de asociación y el control de la violencia parte del Estado (North *et al.* 2009, 3).

Más allá del deber ser, puede ocurrir que los derechos de propiedad tutelados por el Estado de derecho no induzcan a una asignación eficiente de los recursos públicos (Haber *et al.* 2003). Esta ineficiencia puede ser ocasionada por la corrupción (Keefer 2002; Dam 2006), dado que grupos privados se apoderan de las decisiones y recursos públicos. Shaw (2007) señala que en los países corruptos se incrementa el costo de la prestación de servicios públicos.

En los países desarrollados, la teoría señala que la corrupción puede desviar la asignación de recursos públicos, por ejemplo, hacia sectores donde las rentas económicas son mayores (Delavallade, 2006). Sin embargo, en los países en desarrollo, los factores que pueden explicar la corrupción también implican variables políticas. Kauffmann (2015) refiere que en América Latina hay una especie de desempeño dual de las instituciones. Por un lado, la región ha resuelto problemas de terrorismo y de gestión macroeconómica, una mayor transparencia; sin embargo, también advierte que, en promedio, la eficacia del gobierno, el control de la corrupción y la voz y la rendición de cuentas se estancaron en la región; asimismo, la calidad regulatoria general y el estado de derecho se deterioraron.

Debe advertirse que si es escasa aquella literatura que relaciona la corrupción o el estado de derecho con el gasto público, esto todavía es más limitado cuando hablamos de destinos de gasto específicos como los servicios de salud o educación. Algunos estudios señalan que en el caso de la salud, una mala asignación de los recursos y una precaria institucionalización de la gobernanza ponen en riesgo la vida de la población (Rajkumar y Swaroop, 2002); incluso otros trabajos señalan que la corrupción o la ausencia del estado de derecho, entre otras variables, permiten entender que la discusión sobre el gasto en salud también es un tema de eficiencia gubernamental y que, desde luego tiene implicaciones en los resultados en salud de cada país (Makuta y O'Hare, 2015).

Incluso, estudios más recientes publicados en los años de la pandemia, muestran cómo el gasto en salud, pero sobre todo, un buen desempeño de variables institucionales mostraron una mayor eficiencia para contener el virus del covid-19 (Nabin, Chowdhury y Bhattacharya (2021; Baris y Pelizzo (2020).

Por lo que se refiere a la educación, la literatura también analiza cómo la corrupción o la no prevalencia del Estado de derecho se muestran en las variaciones en la asignación

del gasto educativo (Mauro 1998). Pero sobre todo, los estudios enfatizan cómo esto tiene consecuencias en la formación de capital humano o en la deserción escolar (Gupta, Davoodi y Tiongson 2000).

Incluso existen autores que sostienen que el gasto gubernamental en salud y educación pueden ser analizados de manera complementaria en tanto que ambos son susceptibles de afectar su desempeño o resultados a causa de la corrupción (Cordis, 2014; Hessami, 2014; Mushfiq, Sami Ben Alib y Temimib, 2019).

Hasta aquí debe señalarse que, desde el punto de vista neoinstitucional, la literatura ha dado más relevancia al Estado de derecho y al control de la corrupción como elementos que pueden explicar las distorsiones en el gasto público. Sin embargo, la mayor parte de estos argumentos están pensados desde países desarrollados en los que importa garantizar las condiciones de mercado. No obstante, hay cuestiones que deben profundizarse en la literatura. Por ejemplo 1) cómo se relacionan estas variables institucionales cuando las decisiones de distribución de los recursos no se orientan por una racionalidad económica; 2) qué efectos pueden suceder no sólo en términos del tamaño del gasto público, sino en la elección de determinados servicios públicos en detrimento de otros; 3) qué consecuencias tienen dichos efectos en la satisfacción de las necesidades de la población y de su acceso a bienes y servicios elementales.

2.2. Estado de Derecho, control de la corrupción y gasto público: análisis empíricos

En esta sección presentamos los trabajos que establecen relaciones entre Estado de derecho, control de la corrupción y gasto público de manera empírica. La literatura trata de describir esas relaciones o bien de probar la existencia de causalidad.

Como ya hemos referido, el cuerpo de literatura empírica es poco y con varias limitaciones. Una de ellas es que a nivel conceptual hay una falta de consensos sobre las maneras de establecer conceptos mesurables de Estado de derecho y control de la corrupción. Por esa razón, los indicadores más sólidos y usados para los análisis empíricos son el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project y los Worldwide Governance Indicators (WGI) del Banco Mundial, que miden percepciones. Si bien estas mediciones son comparables entre países a lo largo del tiempo, no se dispone de otras fuentes de información adicionales.

Cuadro 1 | Estudios sobre Estado de derecho, corrupción y gasto público

AUTORES / AÑO PUBLICACIÓN	PERIODO / MUESTRA	VARIABLES ADICIONALES	METODOLOGÍA	RESULTADOS
Del Monte y Pennacchio (2020)	1995-2015/ 34 países de OCDE	Total del gasto público como %PIB; deuda pública %PIB/PIB per cápita/Crecimiento del PIB/Inflación/Tamaño del gobierno.	Regresiones en panel y análisis de correlación	La corrupción aumenta la deuda pública en un 2% en el corto plazo; no hay efectos diferenciados en países desarrollados y no desarrollados en términos de gasto público.
Swaleheen, Ben Ali y Temimi (2019)	1983-2018/ 134 países	Guía Internacional de Riesgo País/Educación/Gasto/Salud/Dependencia/Población/Índice ICRG/Deserción/Mortalidad Materna/Mortalidad Infantil.	Regresiones en panel y análisis de correlación	La corrupción tiene un efecto estadísticamente significativo el gasto público; en la mayoría de los países, el efecto es positivo para la salud y negativo para la educación. Los efectos no son lineales. En 16 de alta corrupción, ésta desvía recursos.
Cardénas, García y Gracia (2018),	2014/ 20 países latinoamericanos	Libertad fiscal/Gasto del gobierno/Libertad monetaria/Libertad comercial/Libertad de inversión/Libertad financiera/ 6 variables de WGI.	Análisis multivariado	La región tiene un alto grado de corrupción, un sistema judicial vulnerable a la interferencia política y una enorme burocracia que genera muchos costos gubernamentales.

AUTORES / AÑO PUBLICACIÓN	PERIODO / MUESTRA	VARIABLES ADICIONALES	METODOLOGÍA	RESULTADOS
Wong (2017)	1996 a 2009/16 países asiáticos y 18 lati- noamericanos	Gasto público %PIB/ Inequidad/VARIABLES electorales/6 variables de WGI	Panel no balanceado; Análisis de series de tiempo	La corrupción condiciona el gasto público; en países asiáti- cos niveles altos de corrupción genere una concentración de recursos en el mano de las élites; en América Latina la corrupción se explica más por razones políticas
Ruiz, García y García (2015)	2001-2010/11 países latinoamericanos	Formación bruta de capital fijo/Comercio exterior/Tipo de cambio real efectivo/Ingresos/ Tributarios/Consumo de gobierno /Índice de GINI/6 indicadores de WGI	Regresiones en panel y análisis de correlación	El gasto público incrementa la gobernanza en el corto plazo; pero aumentos de los ingresos fiscales y del gasto público pueden reducir la gobernanza futura

AUTORES / AÑO PUBLICACIÓN	PERIODO / MUESTRA	VARIABLES ADICIONALES	METODOLOGÍA	RESULTADOS
Dzhumashev (2014)	1960-2010/	Variables de calidad del gobierno, tamaño del gasto público y desarrollo económico de la base de datos World Development Indicators	Técnicas de simulación	La corrupción mejora la eficiencia económica sólo cuando el tamaño real del gobierno está por encima del nivel óptimo. A mayor crecimiento, menor corrupción porque la tasa salarial aumenta y hace que los costos privados de búsqueda de rentas sean más altos
Delavallade (2006)	1996 A 2001/51 países desarrollados y 13 en desarrollo	Control de la Corrupción del WGI/Gasto Público del IMF/Población urbana/población por edad/Impuestos/PIB per cápita constante/personal militar/deuda del gobierno central/contribución social en el PIB/libertad global	Mínimos cuadrados ordinarios/ Sistema de ecuaciones simultáneas	Se deben reasignar gastos de servicios públicos y orden, defensa, cultura y energía hacia educación, salud y protección social para contrarrestar los efectos distorsionadores de la corrupción.

AUTORES / AÑO PUBLICACIÓN	PERIODO / MUESTRA	VARIABLES ADICIONALES	METODOLOGÍA	RESULTADOS
Gupta, De Mello y Sharan (2000)	1985-1998/120 países	Índice de corrupción de Transparencia Internacional/ Ingreso per cápita como %PIB, Gasto público como %PIB/Datos de armas y gasto militar/ Urban- ización.	Técnicas de regresión de panel.	Los resultados sugieren que la corrupción está efectivamente asociada con un mayor gasto militar como porcentaje del PIB y del gasto público total, así como con la adquisición de armas en relación con el PIB y el gasto público total.
Mauro (1998)	1980-83/63 países	Guía Internacional de Riesgo País/Ingreso per cápita como %PIB, Educación secundaria/ Tasa de crecimiento población/Distintas variables de gasto como % del PIB: educación, defensa, transferencias, seguridad social, pagos de bienestar.	Técnicas de regresión de panel y análisis de correlación.	El gasto total no tiene una correlación positiva con la co- rrupción. Sin embargo, cuando se estudia por partidas se ob- servan correlaciones positivas y significativas (educación) Los autores señalan que en la composición del gasto público es que a los gobiernos corrup- tos les resulta más fácil cobrar sobornos en algunas partidas de gastos que en otras.

Fuente: Elaboración propia

Otra limitación es la potencial existencia de relaciones no lineales entre los indicadores económicos e institucionales. Incluso, los indicadores de la base WGI ha sido criticados por estas restricciones (véase Thomas, 2009; Langbein y Knack, 2010). En la tabla 1 se sintetizan los principales trabajos que empíricamente analizan estas variables. Se exponen los autores, las muestras que utilizan (países y años observados), las técnicas de investigación y sus principales conclusiones en términos de gasto público.

La mayor parte de los estudios son análisis comparados en los que la variable de gasto se refiere a los egresos del gobierno central. Para efectos de comparación, el gasto público se expresa como un porcentaje del PIB. La principal implicación es que esta medición adiciona lo relativo a bienes y servicios, pero también a la prestación de subsidios y transferencias. Así, se asume que la corrupción o la ausencia de Estado de derecho tienen efectos macroeconómicos para un país.

Algunos trabajos logran capturar el tamaño y destino del gasto en servicios específicos (Mauro, 1998; Gupta, De Mello y Sharan, 2000; Delavallade, 2006) sobre todo en aquellos que incrementan la renta, bajo el argumento de que esto puede coincidir con la corrupción basada en intereses privados.

Apenas hay un grupo de trabajos que capturan el efecto en la capacidad de los países para paliar la pobreza (Wong, 2017); y satisfacer necesidades básicas de la población (Del Monte y Pennacchio, 2020; Swaleheen, Ben Ali, y Temimi, 2019). Esto último es relevante porque implica reconocer que no siempre hay un sentido económico que motive la corrupción y porque los autores van más allá de estudiar los efectos de la corrupción en variables de crecimiento o riqueza.

Por lo que se refiere a la metodología, la mayor parte de los trabajos se basan en mediciones anuales de las variables de corrupción, Estado de derecho, así como el resto de las económicas o sociales; la técnica más utilizada es el análisis de panel. Por el tipo de fuentes empleadas, se trata de estudios basados en percepciones de los indicadores institucionales. En relación al tamaño de las muestras seleccionadas, casi siempre se consideran países de la OCDE (Del Monte y Pennacchio 2020; Dzhmashev, 2014; Mauro, 1998). Pocos trabajos distinguen entre países con diferentes grados de desarrollo económico (Delavallade (2006; Wong 2017). Los estudios suelen ser paneles balanceados, lo que permite tener un mayor grado de certeza acerca de las conclusiones. También debe señalarse que, dado los problemas para plantear una causalidad, los autores también análisis de correlación.

Finalmente, por lo que se refiere a los hallazgos, la literatura no tiene un consenso. Algunos autores afirman que sí existe una relación significativa estadísticamente (Swaleheen, Ben y Temimi, 2019; Cardénas, García y Gracia, 2018; Wong, 2017; Ruiz, García y García, 2015; Dzhumashev, 2014; Delavallade, 2006; Gupta, De Mello y Sharan, 2000; Mauro, 1998). Sin embargo, dicha relación no es positiva como se esperaría. Esto es, no siempre se confirma que una alta percepción del estado de derecho o del control de la corrupción mejore el gasto público. Lo que sí queda demostrado es que la corrupción puede hacer que varíen mucho los montos financieros que se asignan a la provisión de bienes y servicios públicos, lo que sin duda termina por beneficiar a unas personas, pero perjudica a otras.

3. Base de datos e indicadores

En esta sección se describen la base de datos y los indicadores institucionales y de gasto público usados en esta investigación. Particularmente, los indicadores institucionales son construidos usando la base Worldwide Governance Indicators (WGI) del Banco Mundial. Los indicadores de gasto público provienen de la base de datos «Cepalstat» de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL). La base de datos incluye un total de cinco indicadores. Estos indicadores se describen en la tabla 2.

La base de datos incluye indicadores institucionales y de gasto público para dieciséis países latinoamericanos del periodo 2000-2020. Los países incluidos en la base son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Particularmente, cabe destacar que los indicadores son comparables a lo largo del tiempo y entre países. En la tabla 3, muestra los indicadores, su clasificación, sus fuentes y sus denominaciones.

Metodológicamente, la base de datos es un panel de indicadores que incluye 336 observaciones anuales. Los indicadores institucionales reflejan las percepciones de especialistas, ONGs, proveedores de información para empresas comerciales y organizaciones del sector público sobre la situación del Estado de derecho y del control de la corrupción prevalecientes en cada país. Los indicadores de gasto público miden los gastos anuales en educación, salud y servicios generales con base en una clasificación funcional de gasto y las cifras oficiales de cada país.

Análíticamente, los indicadores institucionales miden el respeto que tienen los ciudadanos y el Estado hacia las instituciones que rigen las interacciones sociales y económicas

Tabla 2 | Indicadores institucionales y de gasto público

NOMBRE	DEFINICIÓN
Estado de derecho	Mide el grado en que los agentes confían y obedecen las reglas de la sociedad; en particular, mide la calidad en cumplimiento de contratos, la acción policial y de los tribunales; así como la probabilidad de que se cometan delitos y actos de violencia.
Control de la corrupción	Mide el grado en que se ejerce el poder público en beneficio privado, así como la corrupción en pequeña y gran escala, así como el control del Estado por élites e intereses privados.
Educación	Gasto público en educación en porcentaje del PIB. La cobertura institucional del indicador refiere al gobierno central.
Salud	Gasto público en educación en porcentaje del PIB. La cobertura institucional del indicador refiere al gobierno central.
Servicios generales	Gasto público en servicios públicos generales en porcentaje del PIB. La cobertura institucional del indicador refiere al gobierno central.

Fuente: Elaboración propia con base en las definiciones incluidas en la WGI y el Cepelstat.

Tabla 3 | Indicadores institucionales y de gasto público

	NOMBRE	VARIABLE	FUENTE
Institucionales	Estado de derecho	AROL	WGI
	Control de la corrupción	ACOC	WGI
	Educación	EDU	Cepelstat
Gasto público	Salud	SAL	Cepelstat
	Servicios generales	SPG	Cepelstat

Fuente: Elaboración propia.

Notas: los indicadores institucionales están ajustados a la escala de 0 a 100 (las variables originales se expresan en una escala de -2.5 a 2.5). Valores altos de los indicadores denotan niveles altos de respeto a las instituciones.

entre ellos (Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, 2011). Son indicadores que se construyen estadísticamente usando modelos de componente no observable. Particularmente, los indicadores de la base WGI son reajustados aquí en una escala de cero a 100 para facilitar su

interpretación.² Así, valores altos de los indicadores institucionales se vinculan a niveles altos de respeto hacia las instituciones.

Los indicadores de gasto público educación, salud y servicios generales miden los gastos de manera agregada. Los indicadores se construyen con base en la metodología de elaboración de estadísticas de las finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2001). Esta metodología permite que los indicadores describan las tendencias de las erogaciones del gobierno en funciones o finalidades determinadas a lo largo del tiempo. En este contexto, y para facilitar la comparabilidad de los datos entre los países de la región, los indicadores expresan el gasto público en términos de porcentajes del PIB.

4. Análisis estadístico

En esta sección se presenta el análisis estadístico de los indicadores institucionales y de gasto público para los países de América Latina durante el periodo 2000-2020. Este análisis se hace para establecer el contexto del análisis empírico. Por simplicidad los resultados del análisis estadístico se muestran en tablas. Particularmente, tabla 4 muestra las estimaciones de estadística descriptiva de los indicadores para el conjunto de los países analizados. En la tabla 5 muestra los promedios anuales de los indicadores de cada país. En la tabla 6 muestra las correlaciones *pairwise* entre los indicadores institucionales y de gasto público.

En la tabla 3 muestra algunos hechos estilizados sobre los indicadores de América Latina durante el periodo analizado. Particularmente, la tabla muestra que, en promedio, los países registraron: 1) indicadores institucionales y de gasto público relativamente bajos y heterogéneos; 2) puntajes promedio mayores para el indicador control de la corrupción (44.0) que para el indicador Estado de derecho (41.03); y 3) gastos públicos promedio en educación, salud y servicios públicos equivalentes, respectivamente, al 3.74, 1.87 y 4.94 por ciento de su PIB anual.

La tabla 4 evidencia que, durante el periodo analizado, hubo bajos niveles de respeto hacia las instituciones y bajos niveles de gasto público en América Latina. Más aún, la tabla sugiere que en la región hubo mayores esfuerzos para controlar la corrupción que para hacer prevalecer el Estado de derecho. El indicador promedio asociado a control de la corrupción (44.0) fue más alto que su contraparte asociada al indicador Estado de de-

.....
² Los indicadores originales de la base WG1 están en una escala -2.5 a 2.5.

Tabla 4 | Estadística descriptiva de los indicadores de América Latina, 2000-2020

INDICADOR	OBSERVACIONES	MEDIA	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	MÍNIMO	MÁXIMO
INDICADORES INSTITUCIONALES					
Estado de derecho	336	41.03	14.73	3.10	78.70
Control de la corrupción	336	44.00	14.79	18.80	81.80
Indicadores de gasto público					
Educación	324	3.74	1.39	0.72	7.24
Salud	324	1.87	0.92	0.30	6.03
Servicios públicos	323	4.94	2.71	0.59	13.23

Fuente: Elaboración propia.

Notas: Los indicadores institucionales están ajustados en la escala de 0 a 100. Valores altos de los indicadores denotan niveles altos de respeto hacia las instituciones. Los indicadores de gasto público se expresan en puntos porcentuales de PIB.

recho (41.0). La tabla, además, muestra que los niveles de gasto público fueron muy bajos de acuerdo a los estándares internacionales.³

La tabla 5 muestra que los países tuvieron indicadores institucionales heterogéneos. Los países que tuvieron los indicadores de Estado de derecho y de control de la corrupción más altos, en orden decreciente, fueron Chile, Uruguay y Costa Rica. Los promedios del indicador de Estado de derecho para dichos países fueron, respectivamente, 75.52, 62.41 y 60.73 de un máximo de 100.00. Los promedios del indicador control de la corrupción para dichos países fueron, respectivamente, 77.29, 73.65 y 62.84 de un máximo de 100.00. Venezuela, por contraste, tuvo los indicadores institucionales más bajos.

.....
³ Esta afirmación se sustenta en la comparación entre los indicadores de gasto público de los países de América Latina y los pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Si bien aquí se utilizan dichos indicadores con fines de referencia, debe señalarse que los indicadores de ambos grupos de países no son estrictamente comparables. En este contexto, cabe mencionar que, en promedio, los gastos anuales en educación y salud en los países de la OCDE ascendieron a 4.04 y 6.85 por ciento del PIB durante el periodo 2017-2021. Los gastos públicos en bienes y servicios públicos individuales, por su parte, ascendieron a 9.36 por ciento del PIB durante el periodo 2000-2020.

Los indicadores de gasto público, si bien bajos, mostraron una mayor heterogeneidad que los institucionales. Esta heterogeneidad evidencia que los gobiernos de los países tuvieron prioridades diferentes de gasto. Los gobiernos que más gastaron en educación, como porcentaje de su PIB, fueron los de Costa Rica (5.87%), Honduras (5.84%) y Bolivia (5.70%).⁴ Los gobiernos que más gastaron en salud fueron los de Chile (3.65%), Nicaragua (2.96%) y Honduras (2.77%).⁵ Los gobiernos que más gastaron en servicios públicos generales fueron los de Venezuela (9.76%), Brasil (8.94%) y Ecuador (7.87%).⁶

La tabla 4, por tanto, muestra que en América Latina hubo gran heterogeneidad en los indicadores institucionales y de gasto público. También sugiere que dicha heterogeneidad fue mayor en los indicadores de gasto que en los institucionales. Asimismo, sugiere que, en la región, hubo mayores esfuerzos institucionales para controlar la corrupción que para hacer prevalecer el Estado de derecho. Sin embargo, también evidencia que los niveles de gasto público en educación, salud y servicios públicos generales fueron muy bajos de acuerdo a estándares internacionales.

La tabla 6 muestra la existencia de correlaciones estadísticamente significativas y positivas entre los indicadores institucionales y de gasto público. Particularmente, la tabla sugiere que las mejoras institucionales pueden reflejarse en un mayor gasto en salud pública. Esta afirmación se basa en la consideración de que hay correlaciones significativas, pero bajas, entre los indicadores Estado de derecho y salud (0.2184) y entre los indicadores control de la corrupción y salud (0.2104). Además, la tabla muestra que existe una correlación alta entre los indicadores Estado de derecho y control de la corrupción (0.9297).

La tabla 6 también sugiere que las mejoras institucionales se reflejan de manera diferenciada en el gasto público. Esta afirmación se sustenta en los siguientes hallazgos: 1) Hay una correlación estadísticamente significativa, pero negativa, entre los indicadores Estado de derecho y servicios generales (-0.1379); 2) no hay correlación entre los indicadores control de la corrupción y servicios generales; 3) hay una correlación significativa y positiva entre

.....
⁴ Los gobiernos que menos gastaron en educación, como porcentaje de su PIB, fueron los de Brasil (1.90%) y Argentina (1.24%).

⁵ Los gobiernos que menos gastaron en salud fueron los de Argentina (0.78%) y Costa Rica (0.61%).

⁶ Los gobiernos que menos gastaron en servicios públicos generales fueron los de Chile (1.53%) y Bolivia (1.44%).

Tabla 5 | Promedios anuales de los indicadores de América Latina, 2000-2020

PAÍS	ESTADO DE DERECHO	CONTROL DE LA CORRUPCIÓN	EDUCACIÓN	SALUD	SERVICIOS PÚBLICOS
Chile	75.52	77.29	4.13	3.65	1.53
Uruguay	62.41	73.65	3.51	2.30	7.16
Costa Rica	60.73	62.84	5.87	0.61	4.05
Brasil	45.87	47.10	1.90	1.88	8.94
Colombia	40.40	43.99	3.28	2.09	4.35
Panamá	47.92	42.92	3.49	1.92	5.36
Argentina	38.52	42.55	1.24	0.78	3.53
El Salvador	36.97	41.29	3.62	2.15	5.59
México	40.07	40.58	3.49	0.99	6.17
Bolivia	31.95	37.34	5.70	1.54	1.44
Ecuador	32.10	36.02	3.54	1.70	7.87
Guatemala	29.45	35.46	2.93	1.20	2.60
Nicaragua	34.18	34.22	3.88	2.96	3.16
Honduras	30.87	33.32	5.84	2.77	6.57
Paraguay	33.19	29.72	3.05	1.43	1.88
Venezuela	16.38	25.70	4.77	2.00	9.76
Promedio	41.03	44.00	3.74	1.87	4.94

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cepalstat y WGI.

Notas: Los indicadores institucionales están ajustados en la escala de 0 a 100. Valores altos de los indicadores denotan niveles altos hacia las instituciones. Los indicadores de gasto público se expresan en puntos porcentuales de PIB.

los indicadores salud y educación (0.2979); y, por tanto, 4) hay una relación indirecta, positiva y pequeña, entre la mejora de los indicadores institucionales y el gasto en educación.

Los hallazgos de esta sección muestran que se pueden sintetizar de la siguiente manera: 1) En América Latina hubo mayores esfuerzos para controlar la corrupción que para hacer prevalecer el Estado de derecho; 2) los niveles de gasto público fueron muy bajos de acuerdo a los estándares internacionales; 3) las mejoras institucionales se reflejaron de manera diferenciada en el gasto público; 4) las mejoras institucionales pudieron reflejarse en un mayor gasto en salud pública; y, 5) hubo una relación indirecta, positiva y pequeña, entre la mejora de los indicadores institucionales y el gasto público en educación.

Tabla 6 | Correlaciones *pairwise* de los Indicadores

	ESTADO DE DERECHO		CONTROL DE LA CORRUPCIÓN		EDUCACIÓN		SALUD		SERVICIOS PÚBLICOS
Estado de derecho	<i>1.0000</i>								
Control de la corrupción	0.9297	***	<i>1.0000</i>						
	0.0000								
Educación	<i>0.0347</i>		<i>0.0528</i>		<i>1.0000</i>				
	0.5342		0.3438						
Salud	<i>0.2184</i>	***	<i>0.2104</i>	***	0.2979	***	<i>1.0000</i>		
	0.0001		0.0001		0.0000				
Servicios públicos	-0.1379	**	<i>-0.0827</i>		<i>-0.0655</i>		<i>-0.0042</i>		<i>1.0000</i>
	0.0131		0.1379		0.2402		0.9407		

Fuente: Elaboración propia con base en datos de WGI y Cepalstat.

Notas: Las correlaciones *pairwise* se denotan en *itálicas*. *P-values* en **negritas**. Uno, dos y tres asteriscos indican, respectivamente, niveles de significancia del 10, 5, y 1 por ciento.

5. Modelación de las relaciones entre los indicadores

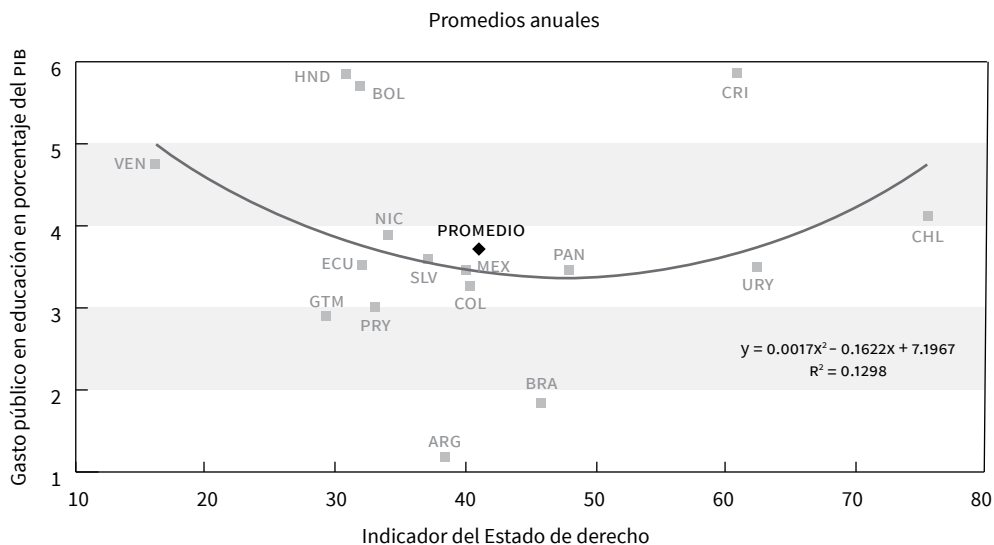
En esta sección se modelan y analizan las relaciones entre los indicadores institucionales y de gasto público en América Latina durante el periodo 2000-2020. Para ello se estiman regresiones que vinculan a los promedios de los indicadores de cada país. Las regresiones permiten modelar y analizar las relaciones entre pares de indicadores sin implicar necesariamente una dirección causal entre los mismos. Las regresiones se estiman usando mínimos cuadrados ordinarios (MCO-OLS) y formas funcionales polinómicas de segundo y tercer grado.⁷ Por simplicidad, las relaciones estimadas se muestran en las figuras 1 a 6.

La gráfica 1 muestra que la relación desagregada estimada entre los indicadores Es-

.....

⁷ Se utiliza la forma funcional polinómica para modelar potenciales relaciones no lineales entre los indicadores. Adviértase que en la sección anterior se concluyó que la evidencia sugería la existencia de relaciones no necesariamente directas ni unívocas entre los indicadores. El grado del polinomio fue seleccionado con base en estimaciones del indicador de bondad de ajuste R^2 (incluido en las figuras). La técnica de estimación, mínimos cuadrados ordinarios (MCO-OLS), garantiza que las estimaciones son las óptimas desde un punto de vista estadístico. Véase Gujarati, Porter y Pal (2021) para una descripción detallada de la mencionada técnica.

Gráfica 1 | Estado de derecho y gasto público en educación en América Latina, 2000-2020



Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cepalstat y wgi.

Notas: Los países incluidos son Argentina (ARG), Bolivia (BOL), Brasil (BRA), Chile (CHL), Colombia (COL) Costa Rica (CRI), Ecuador (ECU), Guatemala (GTM), Honduras (HND), México (MEX), Nicaragua (NIC), Panamá (PAN), El Salvador (SLV), Uruguay (URY) y Venezuela (VEN). Los promedios de la muestra se señalan con el rombo negro. La regresión polinómica se estima mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO-OLS).

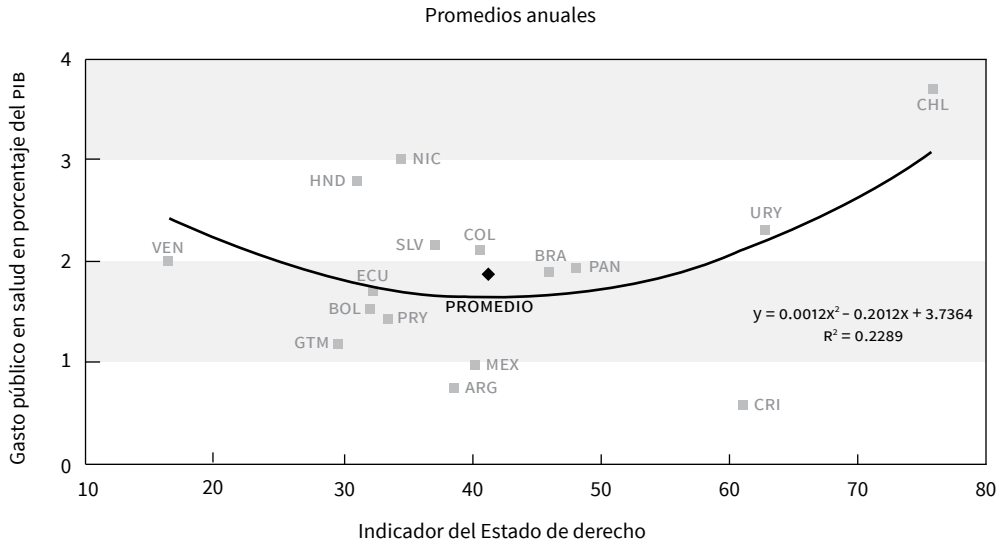
tado de derecho y educación tiene forma de U y una bondad de ajuste de 0.1298. La inflexión que define el cambio de relaciones inversas a directas entre los indicadores ocurre cuando el indicador institucional supera los 47.71 puntos y el indicador de gasto público supera el 3.33% del PIB.⁸ Dada una correlación positiva entre las mejoras institucionales y el gasto público, las estimaciones sugieren que mejoras en el Estado de derecho podrían reflejarse en incrementos en el gasto en educación, particularmente en Uruguay y Chile.⁹

.....

⁸ Los valores de inflexión se obtienen mediante las condiciones de primer orden de las regresiones estimadas.

⁹ La hipótesis de que las instituciones promueven el desempeño económico es común en la liter

Gráfica 2 | Estado de derecho y gasto público en salud en América Latina, 2000-2020



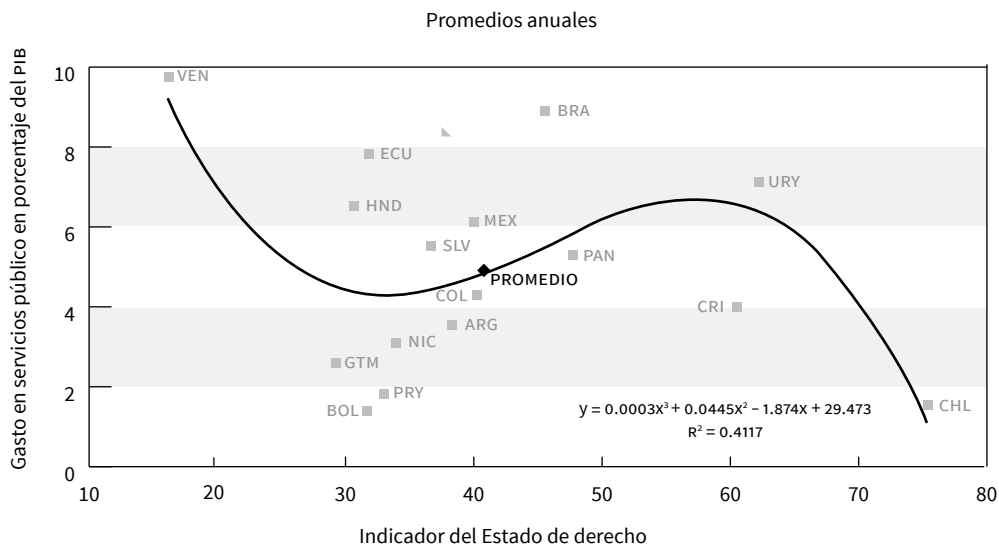
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cepalstat y wgi.

Notas: Los países incluidos son Argentina (ARG), Bolivia (BOL), Brasil (BRA), Chile (CHL), Colombia (COL) Costa Rica (CRI), Ecuador (ECU), Guatemala (GTM), Honduras (HND), México (MEX), Nicaragua (NIC), Panamá (PAN), El Salvador (SLV), Uruguay (URY) y Venezuela (VEN). Los promedios de la muestra se señalan con el rombo negro. La regresión polinómica se estima mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO-OLS).

La gráfica 2 muestra que la relación desagregada estimada entre los indicadores Estado de derecho y salud también tiene forma de U y una bondad de ajuste de 0.2289. La inflexión que define el cambio de relaciones inversas a directas entre los indicadores ocurre cuando el indicador institucional supera los 42.17 puntos y el indicador de gasto público supera el 1.60% del PIB. Dada una correlación positiva entre las mejoras institucionales y

.....
tura. Si se asume dicha hipótesis, bajo la relación estimada en la figura 1, otros países que podrían incrementar su gasto en educación mejorando el indicador Estado de derecho son Venezuela, Guatemala, Ecuador Paraguay, Colombia, Argentina y Brasil.

Gráfica 3 | Estado de derecho y gasto público en servicios públicos en América Latina, 2000-2020



Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cepalstat y wgi.

Notas: Los países incluidos son Argentina (ARG), Bolivia (BOL), Brasil (BRA), Chile (CHL), Colombia (COL) Costa Rica (CRI), Ecuador (ECU), Guatemala (GTM), Honduras (HND), México (MEX), Nicaragua (NIC), Panamá (PAN), El Salvador (SLV), Uruguay (URY) y Venezuela (VEN). Los promedios de la muestra se señalan con el rombo negro. La regresión polinómica se estima mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO-OLS).

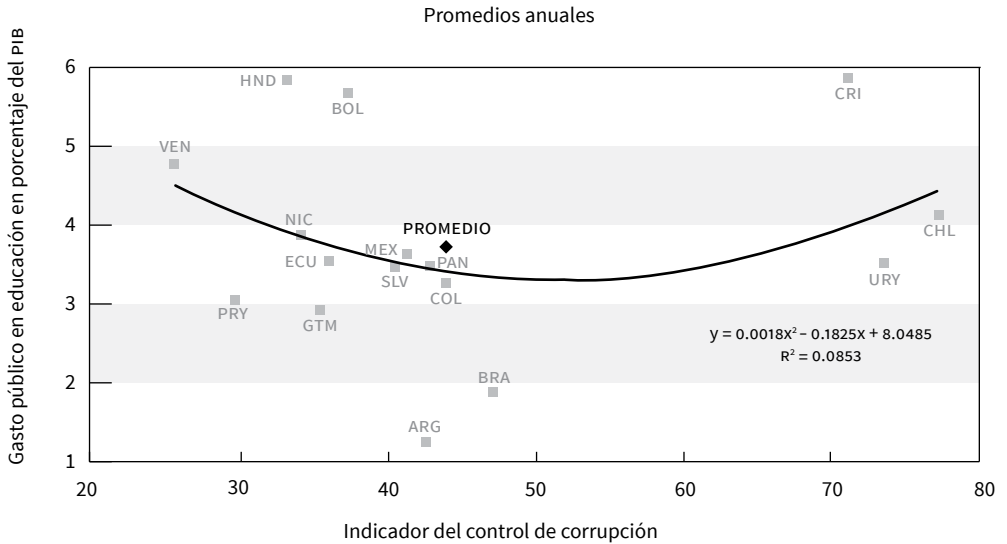
el gasto público, las estimaciones sugieren que mejoras en el Estado de Derecho podrían reflejarse en incrementos en el gasto en salud en Costa Rica.¹⁰

La gráfica 3 muestra que la relación entre Estado de derecho y servicios públicos tiene una forma polinómica de tercer grado y una bondad de ajuste de 0.4117. Las relaciones directas ocurren cuando los indicadores institucional y de gasto oscilan, respectivamente, alrededor de los 41.03 puntos y el 4.94 por ciento del PIB. Así, y dada una correlación

.....

¹⁰ Otros países que podrían incrementar su gasto en salud mejorando el indicador Estado de derecho son Venezuela, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Argentina y México.

Gráfica 4 | Control de la corrupción y gasto público en educación en América Latina, 2000-2020



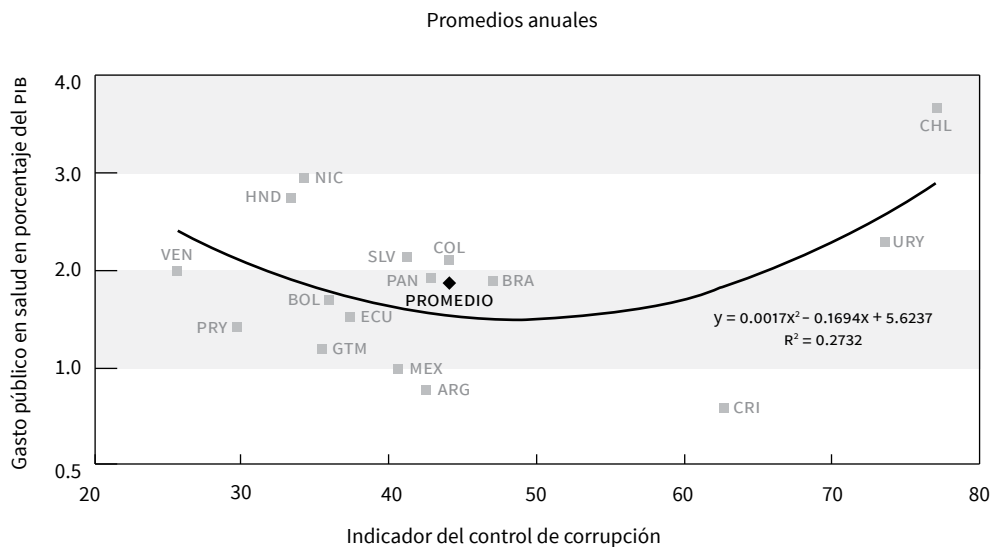
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cepalstat y wgi.

Notas: Los países incluidos son Argentina (ARG), Bolivia (BOL), Brasil (BRA), Chile (CHL), Colombia (COL) Costa Rica (CRI), Ecuador (ECU), Guatemala (GTM), Honduras (HND), México (MEX), Nicaragua (NIC), Panamá (PAN), El Salvador (SLV), Uruguay (URY) y Venezuela (VEN). Los promedios de la muestra se señalan con el rombo negro. La regresión polinómica se estima mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO-OLS).

positiva entre las mejoras institucionales y el gasto público, las estimaciones sugieren que mejoras en el indicador Estado de derecho podrían reflejarse en incrementos en los servicios públicos en Guatemala, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Argentina, Colombia, Panamá y Costa Rica.

La gráfica 4 muestra que la relación desagregada estimada entre los indicadores control de la corrupción y educación tiene forma de U y una bondad de ajuste de 0.0853. La inflexión que define el cambio de relaciones inversas a directas entre los indicadores ocurre cuando el indicador institucional supera los 50.69 puntos y el indicador de gasto público supera el 3.42% del PIB. Así, y nuevamente dada una correlación positiva, las esti-

Gráfica 5 | Control de la corrupción y gasto público en salud en América Latina, 2000-2020



Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cepalstat y WGI.

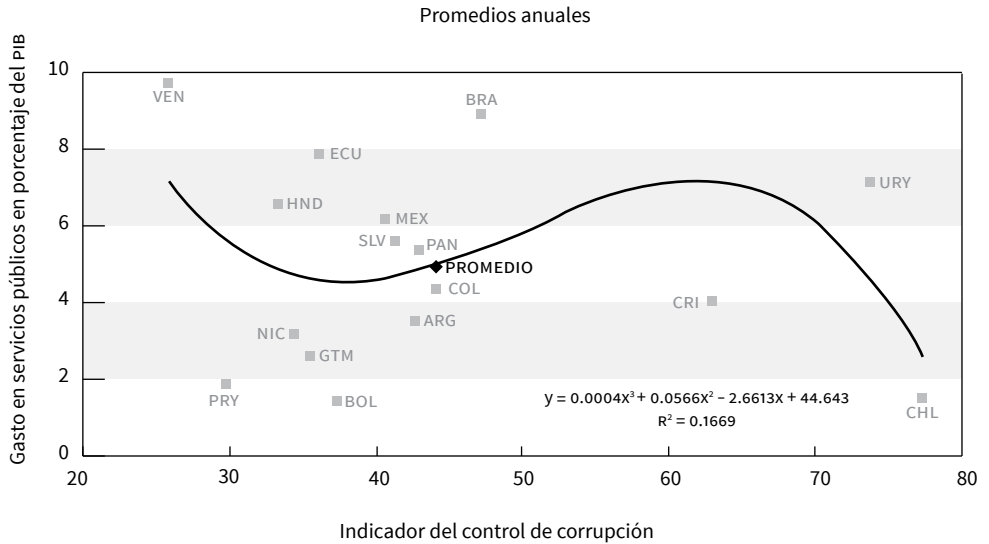
Notas: Los países incluidos son Argentina (ARG), Bolivia (BOL), Brasil (BRA), Chile (CHL), Colombia (COL) Costa Rica (CRI), Ecuador (ECU), Guatemala (GTM), Honduras (HND), México (MEX), Nicaragua (NIC), Panamá (PAN), El Salvador (SLV), Uruguay (URY) y Venezuela (VEN). Los promedios de la muestra se señalan con el rombo negro. La regresión polinómica se estima mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO-OLS).

maciones sugieren que mejoras en el indicador control de la corrupción podrían reflejarse en incrementos en el indicador Educación en Uruguay y Chile.¹¹

La gráfica 5 muestra que la relación desagregada estimada entre los indicadores control de la corrupción y salud también tiene forma de U y una bondad de ajuste de 0.2732. La inflexión que define el cambio de relaciones inversas a directas entre los indicadores ocurre cuando el indicador institucional supera los 49.82 puntos y el indicador de gasto

¹¹ Otros países que podrían incrementar su gasto en educación mejorando el indicador control de la corrupción son Paraguay, Guatemala, Ecuador, Argentina, Colombia y Brasil.

Gráfica 6 | Control de la corrupción y gasto público en servicios públicos en América Latina, 2000-2020



Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cepalstat y WGI.

Notas: Los países incluidos son Argentina (ARG), Bolivia (BOL), Brasil (BRA), Chile (CHL), Colombia (COL), Costa Rica (CRI), Ecuador (ECU), Guatemala (GTM), Honduras (HND), México (MEX), Nicaragua (NIC), Panamá (PAN), El Salvador (SLV), Uruguay (URY) y Venezuela (VEN). Los promedios de la muestra se señalan con el rombo negro. La regresión polinómica se estima mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (MCO-OLS).

público supera el 1.40% del PIB. Así, y nuevamente asumiendo una correlación positiva, las estimaciones sugieren que mejoras en el indicador control de la corrupción podrían reflejarse en incrementos en el indicador salud particularmente en Costa Rica y Uruguay.¹²

La gráfica 6 muestra que la relación entre control de la corrupción y servicios públicos tiene una forma polinómica de tercer grado y una bondad de ajuste de 0.1669. Las relaciones directas ocurren cuando los indicadores institucional y de gasto oscilan, respec-

.....

¹² Otros países que podrían incrementar su gasto en salud mejorando el indicador control de la corrupción son Venezuela, Paraguay, Guatemala, Bolivia, México y Argentina.

tivamente, alrededor de los 44.0 puntos y el 4.94% del PIB. Así, y nuevamente asumiendo una correlación positiva, las estimaciones sugieren que mejoras en el indicador Estado de derecho podrían reflejarse en incrementos en los servicios públicos en Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Argentina, Colombia y Costa Rica.

Las regresiones estimadas denotan la existencia de regularidades en las formas funcionales de las relaciones estimadas. Estas regularidades son las siguientes: 1) Las relaciones entre Estado de derecho y educación y entre Estado de derecho y salud tuvieron forma de U; 2) las relaciones entre control de la corrupción y educación y entre control de la corrupción y salud también tuvieron forma de U; y 3) las relaciones entre Estado de derecho y servicios generales y entre control de la corrupción y servicios generales tuvieron una forma polinómica de tercer grado.

Las regresiones también sugieren que no siempre las mejoras institucionales se vinculan a un mayor gasto público. Particularmente, en gobiernos que tienen bajos indicadores de Estado de derecho y de control de la corrupción, las mejoras institucionales podrían reducir los porcentajes del gasto público destinados a educación y salud. Las estimaciones de bondad de ajuste, además, muestran que Estado de derecho está correlacionado en mayor medida con los gastos en educación ($R^2=0.1298$) y servicios generales ($R^2=0.4117$); control de la corrupción está correlacionado en mayor medida con el gasto en salud ($R^2=0.2732$).

Los principales hallazgos del análisis de modelación pueden sintetizarse de la siguiente manera: 1) Las relaciones entre los indicadores institucionales con los gastos en educación y salud tuvieron forma de U; 2) las relaciones entre los indicadores institucionales con el gasto en servicios generales tuvieron una forma polinómica de tercer grado; 3) no siempre las mejoras institucionales se vinculan a un mayor gasto público; 4) Estado de derecho está correlacionado en mayor medida con los gastos en educación y servicios generales; y, 5) control de la corrupción está correlacionado en mayor medida con el gasto en salud.

6. Conclusiones y discusión

En este artículo se estudiaron algunos hechos estilizados y las relaciones entre el Estado de derecho, el control de la corrupción y los gastos públicos en educación, salud y servicios generales en América Latina. La investigación se sustentó en un análisis estadístico y de

modelación de las relaciones de los indicadores. Así se utilizaron indicadores institucionales y de gasto público, estadísticas descriptivas, correlaciones *pairwise*, regresiones de mínimos cuadrados ordinarios (MCO-OLS) y estimadores de bondad de ajuste. El estudio utilizó un panel de indicadores anuales de dieciséis países latinoamericanos para el periodo 2000-2020.

Los principales hallazgos del análisis estadístico se pueden sintetizar de la siguiente manera: 1) En América Latina hubo mayores esfuerzos para controlar la corrupción que para hacer prevalecer el Estado de derecho; 2) los niveles de gasto público fueron muy bajos de acuerdo a los estándares internacionales; 3) las mejoras institucionales se reflejaron de manera diferenciada en el gasto público; 4) las mejoras institucionales pudieron reflejarse en un mayor gasto en salud pública; y, 5) hubo una relación indirecta, positiva y pequeña, entre la mejora de los indicadores institucionales y el gasto público en educación.

Los principales hallazgos del análisis de modelación pueden sintetizarse de la siguiente manera: 1) Las relaciones entre los indicadores institucionales con los gastos en educación y salud tuvieron forma de U; 2) las relaciones entre los indicadores institucionales con el gasto en servicios generales tuvieron una forma polinómica de tercer grado; 3) no siempre las mejoras institucionales se vinculan a un mayor gasto público; 4) Estado de derecho esta correlacionado en mayor medida con los gastos en educación y servicios generales; y, 5) Control de la corrupción esta correlacionado en mayor medida con el gasto en salud.

Analíticamente, los hallazgos de esta investigación son consistentes con aquellos de los estudios de Wong (2017), Cárdenas, García y Salas (2018) y Del Monte y Pennacchio (2020). Particularmente, los mencionados estudios hallan que las relaciones entre los factores institucionales y el gasto público en América Latina no son siempre positivas ni lineales. Particularmente, Wong (2017) atribuye este resultado al uso clientelar de los recursos públicos en la región. Los hallazgos también validan los resultados de Mauro (1998) sobre la existencia de relaciones entre la corrupción y tipos específicos de gastos públicos.

La investigación aquí planteada puede complementarse en diversas direcciones desde una perspectiva econométrica. Particularmente, sería conveniente analizar la causalidad entre los indicadores, la potencial existencia de raíces unitarias y de relaciones de largo plazo. Estos análisis son complejos debido a los potenciales problemas de micronume-

rosidad, endogeneidad, cambio estructural, multicolinealidad, heteroscedasticidad y de correlación serial en los indicadores. Pese a estas limitaciones, no sobra mencionar que, en la actualidad, los indicadores utilizados son los mejores disponibles para América Latina.

La investigación aquí planteada también puede extenderse con base en consideraciones teóricas relativas a la gobernanza y al gasto público. Sin duda, futuros estudios deberían considerar la inclusión de variables de control en las estimaciones econométricas. El análisis teórico de las relaciones entre las variables institucionales y de gasto público no se acota únicamente en dichas variables. En este contexto, sería conveniente incluir variables de control asociadas a las particularidades de los países latinoamericanos. Asimismo, sería conveniente hacer pruebas y evaluaciones estadísticas para validar las teorías.

Finalmente, no sobra enfatizar que los párrafos anteriores evidencian que es posible y necesario desarrollar investigaciones aplicadas sobre el Estado de derecho, el control de la corrupción y los gastos públicos. En este contexto, este estudio es una aproximación hacia la modelación y cuantificación de las relaciones entre dichas variables en el periodo 2000-2021. Sin duda, se requieren más investigaciones alrededor de dichas relaciones. En opinión de quienes escribe, dichas investigaciones serán importantes para mejorar las administraciones, las finanzas y las políticas públicas de América Latina.

Referencias

- Acemoglu, D. y Robinson, J.A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*. Nueva York: Crown Business.
- , Johnson, S. y Robinson, J. A. (2005). «Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth». En Aghion, P. y Durlauf, S. (Eds). *Handbook of Economic Growth. Vol. I* (pp. 385-472). Amsterdam: North Holland.
- Baris, O. F., y Pelizzo, R. (2020). «Research Note: Governance Indicators Explain Discrepancies in Covid-19 Data». *World Affairs*, 183(3): 216-234.
- Cárdenas, G., García, S., y Salas, A. (2018). «Institutional Framework and Governance in Latin America». *International Journal of Emerging Markets*, 13(5): 1088-1107.
- Cordis, A.S. (2014). «Corruption and the Composition of Public Spending in the United States». *Public Finance Review*, 42(6): 745-773.
- Dam, K. W. (2006). *The Law-Growth Nexus: The Rule of Law and Economic Development*. Washington, DC: Brookings Institution Press.

- Del Monte, A., y Pennacchio, L. (2020). «Corruption, Government Expenditure and Public Debt in OECD Countries». *Comparative Economic Studies*, 62(4): 739-771.
- Delavallade, C. (2006). «Corruption and Distribution of Public Spending in Developing Countries». *Journal of Economics and Finance*, 30(2): 222-239.
- Dzhumashev, R. (2014). «Corruption and Growth: The Role of Governance, Public Spending, and Economic Development». *Economic Modelling*, 37(1): 202-215.
- Gujarati, D.N., Porter, D.C. y Pal, M. (2021). *Basic Econometrics, Sexta Edición*. Nueva Delhi: McGraw Hill.
- Gupta, S., De Mello, L. y Sharan, R. (2000). «Corruption and Military Spending». IMF Working Paper WP/00/23». Washington, DC: Fondo Monetario Internacional.
- , H.R. Davoodi y E.R. Tiongson (2000). «Corruption and the Provision of Health Care and Education Services». IMF Working Paper, WP/00/116. Washington, DC: Fondo Monetario Internacional, 1-33.
- Haber, S., Razo, M. y Maurer, N. (2003). *The Politics of Property Rights: Political Instability, Credible Commitments and Economic Growth in Mexico, 1876-1929*. New York: Cambridge University Press
- Hessami, Z. (2014). Political Corruption, Public Procurement, and Budget Composition: Theory and Evidence From OECD Countries. *European Journal of Political Economy*, 34: 372-389.
- International Monetary Fund. (2001). *Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001*, Segunda Edición, Washington, DC: Fondo Monetario Internacional.
- Kaufmann, D., Kraay, A. y Mastruzzi, M. (2007). «Governance Matters VI: Governance Indicators for 1996-2006». World Bank Policy Research Working Paper WPS4280, Washington, DC: Banco Mundial.
- , ——— y ——— (2011). «The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues». *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2): 220-246.
- Kaufmann, D. (2015). «Corruption Matters: Governance has Progressed in a Few Latin American Countries but Corruption Still Hinders Development in the Region». *Finance & Development*, 52(003), 20-23.
- Keefer, P. y Knack, S. (2002). «Polarization, Politics and Property Rights: Links Between Inequality and Growth». *Public Choice*, 111(1): 127-154.
- Knack, S., Keefer, P. (2006). «Institutions and Economic Performance: Cross-Country

- Tests Using Alternative Institutional Measures». En Knack, S., *Democracy, Governance, and Growth* (pp. 58-78). Michigan: University of Michigan Press.
- y ——— (1995). «Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures». *Economics and Politics*, 7(3): 207-227.
- Langbein, L. y Knack, S. (2010). «The Worldwide Governance Indicators: Six, one, or none?» *Journal of Development Studies*, 46(2): 350-370.
- Makuta, I., y O'Hare, B. (2015). «Quality of Governance, Public Spending on Health and Health Status in Sub Saharan Africa: a Panel Data Regression Analysis». *BMC Public Health*, 15(1): 1-11.
- Mauro, P. (1998). «The Effects of Corruption, Growth, Investment, and Government Expenditure». IMF Working Paper WP/96/98, Washington, DC: Fondo Monetario Internacional.
- (1998). «Corruption and the Composition of Government Expenditure». *Journal Public Economics*, 69: 263-279
- Nabin, M.H., Chowdhury, M.T.H. y Bhattacharya, S. (2021). «It Matters to be in Good Hands: The Relationship Between Good Governance and Pandemic Spread Inferred From Cross-Country Covid-19 Data». *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1): 203, 1-15.
- North, D.C. (1981). *Structure and Change in Economic History*. New York: Norton.
- , Wallis, J.J. y Weingast, B. (2009). *Violence and Social Order: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*. New York: Cambridge University Press.
- Shah, A. (Ed.) (2007). *Performance Accountability and Combating Corruption*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Swaleheen, M., Ali, M. S. B, y Temimi, A. (2019). «Corruption and Public Spending on Education and Health». *Applied Economics Letters*, 26(4), 321-325.
- Rajkumar, A. S., y Swaroop, V. (2008). «Public Spending and Outcomes: Does Governance Matter?». *Journal of Development Economics*, 86(1): 96-111.
- Ruíz-Porras, A. y García Vázquez, N. (2015). «Governance and Economic Growth in Latin America: Some Stylized Facts and Relations». *Journal of Public Governance and Policy: Latin American Review*, 1(1): 55-76.
- , ——— y García Medina, D.P. (2015). «Gobernanza, distribución del ingreso y desempeño económico en América Latina. *Nova Scientia*, 7(15): 616-643.

- Thomas, M. (2009). «What do the Worldwide Governance Indicators measure?» *European Journal of Development Research*, 22(1), 31-54.
- Wong, M.Y. (2017). «Public Spending, Corruption, and Income Inequality: A Comparative Analysis of Asia and Latin America». *International Political Science Review*, 38(3): 298-315.

Bases de datos

- CEPAL, CEPALSTAT: Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp (16 de septiembre de 2022).
- Banco Mundial. Worldwide Governance Indicators. <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home> asp (16 de septiembre de 2022).